

Antofagasta, a once de enero de dos mil veintitrés.

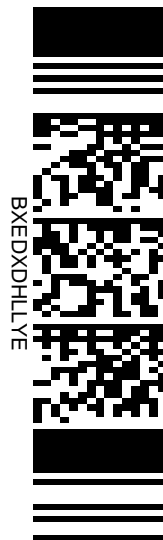
VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de los considerandos Décimo Cuarto y Décimo Sexto, excepto sus respectivos párrafos primeros; Décimo Octavo manteniendo los dos primeros párrafos; Décimo Noveno; y Vigésimo Segundo a Vigésimo Sexto, que se eliminan.

Y SE TIENE, ADEMÁS, PRESENTE:

PRIMERO: Que el Fisco de Chile en su calidad de demandado en un procedimiento sobre constitución de servidumbre, ha interpuesto recurso apelación en contra de la sentencia definitiva dictada en el Cuarto Juzgado de Letras en lo Civil de esta ciudad para que se enmiende conforme a derecho, rechazándose la solicitud de servidumbre o en su defecto, se fije una indemnización que estima en una suma equivalente a 406.297,48 UF cuyo pago se pide una vez, en subsidio 37,504.38 UF por un plazo máximo de 30 años o la cantidad es estime conforme la prudencia, equidad y a los principios y normas que se han transgredido en el fallo.

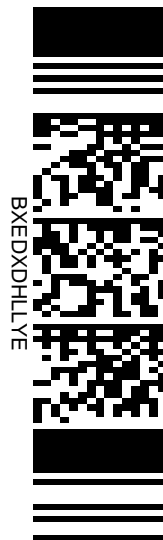
El agravio lo hace consistir en la circunstancia de haberse accedido a la demanda sin que se acreditara la existencia de un proyecto minero y la necesidad de contar con la servidumbre y su extensión, y principalmente porque si bien las sociedades anónimas deberán constituirse conforme a la ley del país y tienen como único objeto el establecimiento, construcción y explotación de los servicios públicos indicados en el artículo 5 de la ley, como también las demás prestaciones relacionadas con dichas actividades, por lo que no se desprende impedimento alguno para la constitución de una servidumbre minera de ocupación, tránsito y eléctrica, ya que de conformidad a los artículos 1 y 22 del Código de Minería, por exigencia



del interés nacional, las excepciones no incluyen a la sociedad anónima y siendo la demandante una Compañía Regional, Aguas Marítimas S.A., titular de una concesión minera, tiene derecho a imponer la servidumbres contempladas en el Código de Minería, lo que hace evidente el agravio porque dicha compañía es una empresa que se encuentra actualmente tramitando ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios una concesión sanitaria para la comuna de Antofagasta y Calama, según se da cuenta en su sitio web y se desprende de la publicación en el Diario Oficial, lo que explica que el proyecto no pretende en su mayor parte, llevar agua desde la cordillera hacia la costa, sino al contrario, como se indica en la página y como ya es un hecho público notorio expuesto por los medios de comunicación de la región, destinado a construir una desaladora, es decir llevar agua desde la costa hacia el interior, por eso se explica el interés de construir ramales del acueducto, pero en concreto no es un proyecto minero por lo que no se justifican la imposición de servidumbres mineras con fines de hacer una distribución y recolección del agua potable, de manera que carece de legitimación para exponer este derecho real y si ello no fuere suficiente, en el extracto de la respectiva inscripción se puede ver claramente que el giro u objeto de las sociedades es establecer, construir y explotar servicios públicos de producción y distribución de agua potable; recolectar, tratar y disponer de las aguas servidas; y realizar las demás prestaciones relacionada con dichas actividades en la forma y condiciones establecidas en las normas aplicables, es decir que no se aprecia una intención de desarrollar un proyecto minero, sino un proyecto de desalación, producción y distribución de agua potable, así como posterior recolección de agua servida. Además agrega que el artículo 8 de la ley General de Servicios Sanitarios,

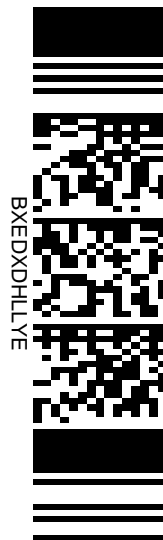


establece en su inciso segundo la obligación de constituir estas sociedades conforme la ley del país y tienen como único objeto el establecimiento, construcción y explotación de los servicios públicos indicados en el artículo 5, es decir la producción y distribución de agua potable con la recolección y disposición de aguas servidas, esto es, que no pueden desarrollar un proyecto minero, de lo que se sigue además una prohibición jurídica al constituirse en una sociedad anónima cuyo objeto único es el indicado en sus estatutos y que está prohibido por ley realizar giro diverso, por lo que causa evidente agravio al Fisco de Chile que debe enmendarse conforme a derecho. En este punto cuestiona la sentencia cuando se refiere a la prueba pericial que se habría apreciado de acuerdo a la sana crítica, respecto del perito Patricio Maya Aguirre porque no hay mayor explicación del supuesto proyecto minero que justifique la imposición del gravamen, también no existe posición alguna para ilustrar al tribunal y al dueño del predio sirviente los motivos que justifican la imposición de la servidumbre, sus características y el trazado no indica cuál es el establecimiento de beneficio, tampoco qué beneficio minerales realizará, por lo que también debe rechazarse puesto que de conformidad al artículo 124 del Código de Minería al no ser útil la servidumbre a la exploración, explotación o el beneficio minero, no se justifica su imposición al dueño del predio. Tampoco precisa el trazado de la cañería en cuanto la aproximación a la comuna, ni cuál es la necesidad de pasar por la Mina Mantos Blanco o a la altura del cruce de la ruta B-26 en el Nudo Uribe de Antofagasta y que finalmente llega hasta el sector alto de La Portada, sin que asimismo explique la razón que el acueducto pase por detrás de la Fundición Alto Norte, ni a esa misma altura, por qué sale y hace un ramal hacia el poniente, ni la necesidad



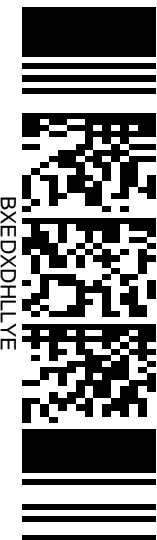
de agua en el sector Playa Escondida hacia el sector industrial de La Negra, que tiene un trazado independiente del original. Para terminar le llama la atención la gran cantidad de polígonos que se ve insertado a lo largo del recorrido del acueducto, supuestamente para la colocación de las bombas de impulsión, lo que no se justifica si se considera que la Laguna Azufrera se encuentra a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, habiéndose ignorado por el tribunal la exigencia del artículo 8 de la ley 18.097 Orgánica Constitucional sobre Concesión Minera y los artículos 120 y 124 del Código de Minería. En suma, estando claro el régimen de constitución de servidumbres legales mineras y las limitaciones que establece el código, no basta que se acredite por una parte ser titular de una concesión minera y por la otra la titularidad del dominio sobre el predio superficial en que se hará efectiva, sino, además que la servidumbre debe ser aprovechada para el fin por el cual fue solicitada en este caso, la construcción e instalación de diversas obras que faciliten la conveniente y cómoda explotación y exploración de las concesiones minera de las cuales titular.

Como segundo agravio se estima que la servidumbre solicitada es incompatible con las normas de uso del suelo contenidas en un instrumento de planificación territorial vigente, porque es en el fondo incompatible al que ha de emplazar en zonas de protección por interés paisajístico, protección ecológica, asociada a monumentos, parques y reservas naturales, zonas preferentemente residenciales y área especial comunal, como también zonas urbanizables de desarrollo condicionado, por lo tanto, al no tener compatibilidad con la planificación estatal existente en varias zonas de la que indica y que resulta de interés público, constituyen un obstáculo para que sea



aprovechada de manera real y efectiva para el fin que se solicita, incluso al cruzar el parque nacional del Llullaillaco requiere tener presente el decreto 856 de 1995 del Ministerio de Bienes Nacionales que declara un lugar de interés científico y, por lo tanto, requiere permiso del Presidente de la República para ejecutar o realizar labores minera en los terrenos del parque según las disposiciones de la Ley 18.241 y así lo sostiene la jurisprudencia que refiere. Por último como tercer agravio se sostiene que la sentencia infringe el artículo 170 número 4 del Código de Procedimiento Civil cuando no considera la prueba rendida para fijar el monto de indemnización, respecto de los informes que se acompañaron que dicen relación con el valor de los predios y el monto aproximado de la indemnización, informes que no fueron objetados debiendo considerarse que estamos frente a una indemnización compensatoria que debe regularse conforme los principios de justicia y equidad y de reparación del daño causado según jurisprudencia de esta misma Corte Apelaciones que transcribe.

SEGUNDO: Que primeramente ha de tenerse presente que el artículo 1° del Código de Minería dispone que: *"El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Pero toda persona tiene la facultad de catar y cavar para buscar sustancias minerales, con arreglo al párrafo 2° de este título, y también el derecho de constituir concesión minera de exploración o de explotación sobre las sustancias que la ley orgánica constitucional declara concesibles, con la sola excepción de las personas señaladas en el artículo 22".*



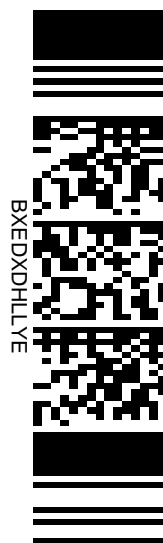
Su artículo 2 establece que *"La concesión minera es un derecho real e inmueble; distinto e independiente del dominio del predio superficial, aunque tengan un mismo dueño; oponible al Estado y a cualquier persona; transferible y transmisible; susceptible de hipoteca y otros derechos reales y, en general, de todo acto o contrato; y que se rige por las mismas leyes civiles que los demás inmuebles, salvo en lo que contraríen disposiciones de la ley orgánica constitucional o del presente Código. La concesión minera puede ser de exploración o de explotación; esta última se denomina también pertenencia. Cada vez que este Código se refiere a la o las concesiones, se entiende que comprende ambas especies de concesiones mineras"*.

Y el artículo 120 del Código de Minería, dentro del Párrafo 1°, denominado *"De las servidumbres que gravan los predios superficiales"*, del Título IX, *"De la exploración y de la explotación mineras"*, regula esta clase de gravamen: *"Desde la constitución de la respectiva concesión y con el fin de facilitar la conveniente y cómoda exploración y explotación mineras, los predios superficiales están sujetos a los siguientes gravámenes:*

1° El de ser ocupados, en toda la extensión necesaria, por canchas y depósitos de minerales, desmontes, relaves y escorias; por plantas de extracción y de beneficio de minerales; por sistemas de comunicación, y por canales, tranques, cañerías, habitaciones, construcciones y demás obras complementarias;

2° Los establecidos en beneficio de las empresas concesionarias de servicios eléctricos, de acuerdo con la legislación respectiva, y 3° El de tránsito y el de ser ocupados por caminos, ferrocarriles, aeródromos, cañerías, túneles, planos inclinados, andariveles, cintas transportadoras y todo otro sistema que sirva para unir la concesión con caminos públicos, establecimientos de beneficio, estaciones de ferrocarril, puertos, aeródromos y centros de consumo".

Además el artículo 8 de la Ley N° 18.097, Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, señala: *"Los titulares de concesiones mineras tienen derecho*



a que se constituyan las servidumbres convenientes a la exploración y explotación mineras. Respecto de esas concesiones, los predios superficiales están sujetos al gravamen de ser ocupados en toda la extensión necesaria para trabajos mineros, por canchas y depósitos de minerales, desmontes, relaves y escorias; por plantas de extracción y de beneficio de minerales; por subestaciones y líneas eléctricas y de comunicación, canales, tranques, cañerías, habitaciones, construcciones y obras complementarias; y a los gravámenes de tránsito y de ser ocupados por caminos, ferrocarriles, cañerías, túneles, planos inclinados, andariveles, cintas transportadoras y todo otro medio que sirva para unir las labores de la concesión con los caminos públicos, establecimientos de beneficio, estaciones de ferrocarril, puertos de embarque y centros de consumo. Dichas concesiones están sujetas en favor de otras, y en cuanto les sean aplicables, a los gravámenes establecidos con relación a los predios superficiales, que, sin impedir o dificultar su explotación, aprovechen a otras y, también, al gravamen de ser atravesadas por socavones y labores mineras destinados a dar o facilitar ventilación, desagüe y acceso. La constitución de las servidumbres, su ejercicio indemnizaciones correspondientes se determinarán por acuerdo de los interesados o por resolución judicial en el procedimiento breve especial que la ley contemple o, si en ésta no se contemplase, en el procedimiento sumario de aplicación general. Las servidumbres en favor de las concesiones mineras son esencialmente transitorias; no podrán aprovecharse en fines distintos a aquellos para los cuales han sido constituidas, y cesarán cuando termine su aprovechamiento. Podrán ampliarse o restringirse de acuerdo con el desarrollo que adquieran las labores relacionadas con ellas. Los titulares de concesiones mineras tendrán los derechos de agua que en su favor establezca la ley”.

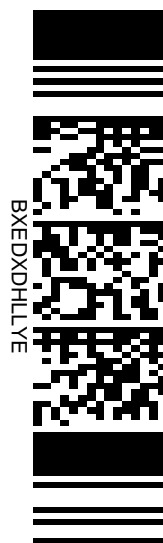
TERCERO: Que se han definido las servidumbres mineras como “los gravámenes que se constituyen en virtud de la ley sobre un predio superficial en utilidad de una concesión minera, de un establecimiento de beneficio o del ejercicio de la facultad de catar y



cavar, o sobre una concesión minera en utilidad de otra o de un establecimiento de beneficio. Por cierto, el predio sirviente y el dominante deben pertenecer a distintos dueños” (Ossa Bulnes, Juan. “Tratado de Derecho de Minería”. Tomo II. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2007. Pág. 462).

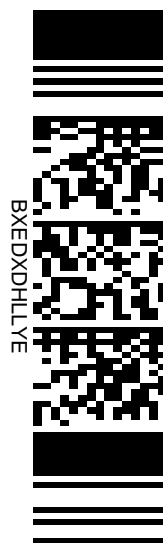
La servidumbre minera es un gravamen, porque impone al predio que la soporta diversas obligaciones y prohibiciones, pudiendo ser de dos tipos: Aquellas que gravan los predios superficiales y que se encuentran reguladas por el Código de Minería en sus artículos 120 y siguientes, y las que gravan unas concesiones mineras en favor de otras, que se rigen por lo establecido en los artículos 126 y siguientes del mismo Código. Tratándose de las primeras, esto es, de las que afectan al predio superficial, podemos distinguir entre las de ocupación y las de tránsito. Las primeras permiten que el beneficiario de este gravamen haga uso del predio “en toda la extensión” siempre que sea necesaria para los distintos fines que exige la ley, mientras que las segundas autorizan el tránsito, es decir, el paso por el inmueble sirviente, así como su ocupación con “camino, ferrocarriles, aeródromos, cañerías, túneles, planos inclinados, andariveles, cintas transportadoras y todo otro sistema que sirva para unir la concesión con caminos públicos, establecimientos de beneficio, estaciones de ferrocarril, puertos, aeródromos y centros de consumo”.

Sobre su justificación se sostiene que: “Uno de los aspectos más importantes del régimen de minería es el establecimiento de reglas claras respecto a las evidentes colisiones de intereses que han de originarse, con motivo de la exploración y explotación, entre el concesionario y los propietarios de los predios respectivos. Es evidente que tanto la exploración como la explotación necesitan ocupar, en



parte importante, según los casos, los terrenos necesarios para desarrollar su objeto; necesita atravesar dichas propiedades, y para ello hacer caminos, etc. Por esta razón, la ley ha creado una serie de servidumbres a favor del concesionario, de acuerdo al texto del art. 120 Código de Minería" (Vergara Blanco, Alejandro. "Sobre los Derechos Mineros en Chile". Revista Chilena de Derecho, Vol. 16 N° 1, Santiago, 1989, pág. 43 y siguientes).

Se agrega que: *"Si bien el minero tiene el dominio sobre su concesión, no lo tiene, la casi totalidad de las veces, sobre los terrenos superficiales en cuyas entrañas aquélla se encuentra situada. Por lo que resulta ineludible que el minero haga uso del terreno superficial ajeno para explorar, explotar y beneficiar las sustancias minerales que se encuentran en el subsuelo. Al hacerlo, está afectando los intereses del propietario superficial. Se hace, pues, necesario buscar una manera práctica y legal, a la vez, para eliminar cualquier conflicto entre las partes y evitar los entorpecimientos en el desarrollo económico de cada cual"* (Gómez Núñez, Sergio. "Manual de Derecho de Minería", 1° edición, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1991, pág. 234). También se ha sostenido que: *"El desarrollo de labores mineras requiere de ciertas facultades para su mayor rapidez y eficacia, para lo cual se otorgan derechos especiales al titular de las concesiones mineras y al establecimiento de beneficio de minerales con el objeto que la búsqueda, exploración, explotación y beneficio de minerales se realicen oportuna y eficazmente. Entre estos derechos especiales se destacan, por su especial fisonomía y regulación jurídica, las servidumbres legales mineras, establecidas y reguladas en los arts. 120" y siguientes del código (Ovando Camino, Iván. "La servidumbre legal minera de ocupación de predios superficiales por canales*



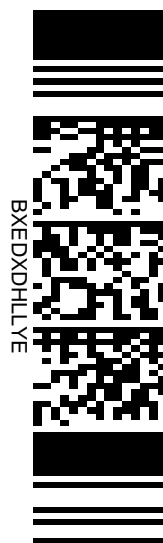
y cañerías de agua. Notas sobre un conflicto normativo". Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, XXV, Valparaíso, 2004).

CUARTO: Que la demandante sociedad "Compañía Regional Aguas Marítimas S.A." ha sostenido "ser titular de la concesión minera de explotación, ubicada en la Comuna y Provincia de Antofagasta, Segunda Región de Antofagasta, denominada **"BAHÍA UNO AL CUARENTA Y OCHO"**, y cuya acta de mensura y sentencia constitutiva se encuentra inscrita a fojas 645 número 320, del Registro de Propiedad del Conservador de Minas de Antofagasta correspondiente al año 2020 y, en lo esencial requiere la servidumbre porque se "pretende desarrollar un proyecto consistente en la construcción de una planta de beneficio de minerales que se abastecerá con agua continental que se conducirá desde su captación en la Laguna Azufrera, en la cordillera, hasta el lugar de las instalaciones mineras, a través de un acueducto, con todas las instalaciones y construcciones que ello conlleva y, asimismo, de su correspondiente línea eléctrica, accesos y caminos"; todo ello conforme lo permite el artículo 120 Nos. 1, 2 y 3 del Código de Minería, para facilitar la conveniente y cómoda exploración y explotación de la concesión minera "Bahía 1 al 48", porque "Sobre la referida servidumbre minera se construirá, por una parte, las construcciones y campamento temporal mientras dure la fase de exploración y la puesta en marcha; las construcciones y campamento definitivo, una vez en operación; las canchas y depósitos de minerales; la planta de extracción y beneficio de minerales; sistemas de comunicación; acueducto, cañerías y demás obras complementarias; como así también las líneas eléctricas necesarias para alimentar todos los equipos que se instalarán para el buen funcionamiento del proyecto; y los accesos, caminos y similares que también se requerirán para el buen éxito



del proyecto. El acueducto propiamente tal se destinará, como se señaló, a transportar agua desde su captación en la denominada 'Laguna La Azufrera', hasta el área en donde se encuentra la servidumbre de ocupación para planta, construcciones y obras complementarias que facilitarán la conveniente y cómoda exploración y explotación mineras de la concesión minera "Bahía 1 al 48", ubicada en el sector costero al sur de la Ciudad de Antofagasta, cercano a Caleta Bolfín, cuyo punto de interés tiene las siguientes coordenadas U.T.M.: NORTE: 7.359.400,00 metros, ESTE: 345.800,00 metros, referidos al Elipsoide Internacional 1924, Datum PSAD56. Con tal agua se abastecerá, en su oportunidad, una planta de beneficio para tratar los minerales que se extraigan de dicha concesión y, eventualmente, de otras concesiones de titularidad de terceros, que pudieran abastecerla."

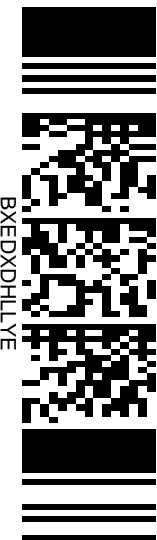
QUINTO: Que conforme lo reseñado precedentemente, la Compañía Regional Aguas Marítimas S.A., como titular de una concesión minera de **explotación** sostiene que requiere la servidumbre para la construcción de una planta de beneficios de minerales, abastecida con agua continental captada en la Laguna Azufrera, a través de un acueducto y, también la correspondiente línea eléctrica, accesos y caminos que faciliten la conveniente y cómoda exploración y explotación. Además se construirá un campamento temporal mientras dure la fase de exploración y puesta en marcha, se construirá un campamento definitivo y en operaciones las canchas y depósitos de minerales, la planta de extracción y beneficio, sistema de comunicación, acueducto cañerías y demás obras complementarias, como las líneas eléctricas necesarias para alimentar todos los equipos que se instalarán junto con los accesos, caminos y similares, precisándose que el acueducto se destina a transportar agua desde su captación hasta el área donde se encuentra la servidumbre de ocupación para



la planta, construcciones y obras complementarias que faciliten la conveniente y cómoda exploración y explotación, ubicado en el sector costero, al sur de la ciudad de Antofagasta.

SEXTO: Que según lo expresado debe entenderse que la demandante Compañía Regional Aguas Marítimas S.A., como titular de una concesión minera de explotación, requiere la servidumbre para la construcción de una planta de beneficios de minerales, abastecida con agua continental captada en la Laguna Azufrera, a través de un acueducto, como también para la construcción de la correspondiente línea eléctrica, accesos y caminos que faciliten la conveniente y cómoda exploración y explotación. Además, se dijo que se construirá un campamento temporal mientras dure la fase de exploración y puesta en marcha, más un campamento definitivo y, en operaciones generales se construirán las canchas y depósitos de minerales, planta de extracción y beneficio, sistema de comunicación, acueductos, cañerías y demás obras complementarias, como las líneas eléctricas necesarias para alimentar todos los equipos que se instalarán junto con los accesos, camino y similares, precisándose que el acueducto se destina a transportar agua desde su captación hasta el área donde se encuentra la servidumbre de ocupación para la planta, construcciones y obras complementarias que faciliten la conveniente y cómoda exploración y explotación, ubicado en el sector costero, al sur de la ciudad de Antofagasta.

SÉPTIMO: Que si bien para conceder una servidumbre minera se requiere que se encuentre constituida la concesión minera en favor de quien la solicita, esto es, que sea titular de la pertenencia; y que la servidumbre pedida permita o facilite su exploración o explotación, es decir, sea útil o contribuya a alcanzar tales objetivos, debe precisarse



como se dijo en el considerando precedente que se solicitó también para abastecerse de aguas captadas en un sector cordillerano de altura y que según la propia sentencia impugnada, en folio 131 consta el oficio evacuado por la Dirección General de Aguas Región de Antofagasta, la que mediante el Ord. N° 207, informa lo siguiente: "Mediante Resolución D.G.A. N°04 de fecha 13 de enero de 2012, tomado razón por la Contraloría General de la República, con fecha 06 de marzo del mismo año, y totalmente tramitada el 20 de marzo de 2012, se constituyó un derecho de aprovechamiento de carácter consuntivo, de ejercicio permanente y continuo, sobre aguas superficiales y detenidas, al Sr. Carlos Claussen Calvo, en la comuna, provincia y Región de Antofagasta" (textual).

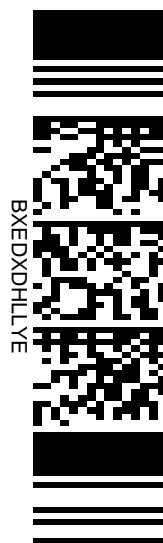
Sobre las servidumbres relativas a las aguas que establece el Código de Aguas, debe destacarse los siguientes artículos:

"Artículo 5 quinquies: Los derechos de aprovechamiento que se otorguen sobre aguas reservadas podrán transferirse, siempre que se mantenga el uso para el cual fueron originariamente concedidos y las transferencias sean informadas a la Dirección General de Aguas"

"Artículo 25°: El derecho de aprovechamiento conlleva, por el ministerio de la ley, la facultad de imponer todas las servidumbres necesarias para su ejercicio, sin perjuicio ARTICULO 26°- *El derecho de aprovechamiento comprenderá la concesión de los terrenos de dominio público necesarios para hacerlo efectivo. Abandonados estos terrenos o destinados a un fin distinto, volverán a su antigua condición"*

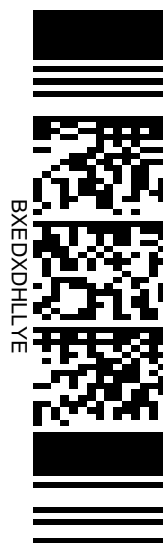
"Artículo 72°- Las servidumbres relativas a las aguas que establece el Código de Minería, se constituirán y ejercerán con arreglo a las disposiciones del presente Código".

De lo que se infiere que el derecho a la servidumbre para el aprovechamiento de agua es del



titular de este derecho de aprovechamiento, de carácter consuntivo, de ejercicio permanente y continuo sobre aguas superficiales y no del concesionario minero. En consecuencia la servidumbre solicitada en lo que acueducto se refiere, además de no estar vinculada con la sociedad demandante y que es una persona distinta, no cumple con el presupuesto esencial para conceder una servidumbre minera, desde que no se encuentra constituida la concesión minera en favor de quien la solicita, en cuanto al aprovechamiento de las aguas que requiere para su traslado una servidumbre en los términos del Código de Aguas. El acueducto que se construye, es sobre predios cuya servidumbre se ejerce en beneficio del titular del derecho de aprovechamiento y no a quien se le distribuya o adquiera el beneficio de este bien, porque justamente es hacer provecho de su derecho de agua inscrito, lo que el legislador dejó en claro al establecer en el artículo 110 del Código de Minería, que el titular de una concesión minera tiene por el solo ministerio de la ley, únicamente el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en las labores de su concesión, siempre que tales aguas sean necesarias para los trabajos de explotación.

Además se aleja de la certeza y se produce una confusión cuando la propia demandante, ha pedido al organismo correspondiente una concesión distinta y que se encuentra en tramitación, específicamente la concesión de servicios públicos sanitarios, de producción y distribución de agua potable, como también de recolección y tratamiento de aguas servidas, por consiguiente, en lo que a los tramos de acueductos se refiere, además que el informe pericial emitido por Patricio Maya Aguirre nada expresa de estas situaciones, no es posible otorgar una servidumbre minera para abastecerse de agua continental respecto de un titular del derecho de agua distinto.

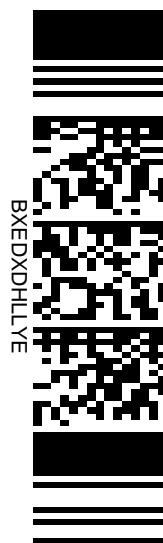


OCTAVO: Que asimismo, la omisión constatada precedentemente, teniendo presente lo extenso y heterogéneo del trazado de la servidumbre solicitada, debió precisarse el fundamento del recorrido para explicar la utilidad y el interés, pues nada se dijo sobre la necesidad de pasar por puntos tan disímiles, que justamente la demandada cuestionó desde la misma contestación de la demanda, por lo que la prueba pericial no es útil para los presupuestos esenciales de esta servidumbre minera, desde que tratándose de aprovechamientos de aguas respecto de personas distintas, la facilitación de la explotación de las aguas, antes de la explotación minera le corresponde al titular de la inscripción de los derechos de aguas que será el beneficiado directo de su inscripción y para lo cual debe regirse por el Código de Aguas.

Sobre este punto, desde el principio el Código de Minería de 1930, exigió respecto del uso de las aguas, solicitar "la respectiva merced en conformidad a las disposiciones legales" según su artículo 88.

La doctrina ha dejado en claro la extensión de lo dispuesto en el artículo 72 del Código de Aguas, en cuanto a su aplicación concluyéndose que: *"Este artículo ha presentado evidencia histórico-jurídica para sustentar una tesis interpretativa sobre el sentido y alcance de la expresión las servidumbres relativas a las aguas que establece el Código de Minería, que emplea el art. 72 CA. 1981.*

Para esta tesis interpretativa las servidumbres aludidas por el legislador corresponden a los diversos derechos de aprovechamiento de aguas que pueden solicitar el concesionario minero y el propietario de un establecimiento de beneficio, para efectos de la exploración, explotación o beneficio de sustancias minerales, atendido lo dispuesto en el art. 111 CM. 1983, cuyos antecedentes histórico-legales permiten establecer que la referencia efectuada por el legislador de minas al uso en dicha disposición legal, lo fue



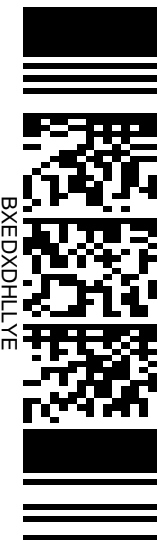
a una utilización y/o consumo propiamente tales de las aguas acorde a la naturaleza de las labores mineras previstas en ella, lo que requiere la adquisición de los mentados derechos.

En consecuencia, la impropiedad terminológica que exhibe el art. 72 CA. 1981 obedece a razones históricas, provenientes de la primera codificación del derecho de aguas efectuada en 1951, la que en esta materia fue reactiva a las codificaciones iusmineras de los años 1930 y 1932, cuya defectuosa redacción dio lugar a ambigüedades e incertidumbres doctrinales sobre los derechos y servidumbres de aguas del minero y del establecimiento de beneficio.” (Obando Camino, Iván Mauricio. (2004). Las Servidumbres Relativas a las Aguas que Establece el Código de Minería. Revista de derecho (Valdivia), 17, 161-83.<https://dx.doi.org/10.4067/S071809502004000200007>)

NOVENO: Que todo lo relacionado a la construcción de una desoladora, no tiene injerencia en este conflicto que surge sobre la servidumbre que solicita la demandante en calidad de titular de una pertenencia minera y no como dueño o propietario derechos referentes a la desoladora o de alguna distribución de agua, como tampoco de una empresa sanitaria.

DECIMO: Que teniendo presente la confusión que se produce a propósito del trazado de la servidumbre en lo que la distribución del agua se refiere, específicamente los tramos para el acueducto, con relación a los demás aspectos solicitados para la explotación de la concesión minera, resulta contradictorio e inoficioso un pronunciamiento sobre los demás agravios contenidos en la apelación.

Debe asimismo indicarse que surge una duda razonable en cuanto al trazado y otras solicitudes, de distinta naturaleza, que dan cuenta que lo pretendido es hacer en definitiva una sistema de abastecimiento y comercialización de aguas, porque el propio trazado

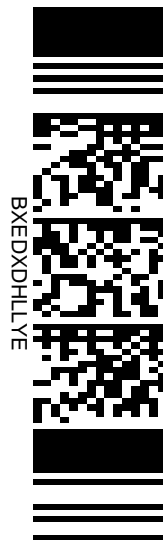


demuestra que se recorre buena parte del territorio regional sin que aparezca que tiene como único y exclusivo destino la supuesta planta de beneficios. Luego, aun cuando el proyecto minero pueda existir, esta solicitud pareciera que tiene un objeto que con mucho supera las necesidades de dicha planta, a lo que se colige que el proyecto, por su trazado, envergadura, solicitudes conexas y todo lo demás, no está destinado a servir exclusivamente a la concesión minera que se indica y que aprovecha los derechos del concesionario minero para construir un sistema de comercialización de aguas a nivel regional.

UNDÉCIMO: Que existiendo variada jurisprudencia sobre el asunto y diversos puntos de vista respecto de las concesiones mineras, ello hace plausible los motivos para litigar por lo tanto no es conveniente la condena al pago de las costas de la causa o del recurso.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 186 siguientes del Código de Procedimiento Civil, **SE REVOCA**, sin costas del recurso, la sentencia de fecha quince de junio de dos mil veintidós, dictada en causa rol N°1.163-2021 en el Cuarto Juzgado Civil de Antofagasta, que acogió la demanda interpuesta en contra del Fisco de Chile por "Compañía Regional Aguas Marítimas S.A." sobre servidumbre minera de ocupación y tránsito respecto de terrenos superficiales para ser utilizados por sistemas de comunicación, por canales, tranques, cañerías, habitaciones, construcciones, servicios eléctricos, y demás obras complementarias y destinaciones que permite el Código de Minería y, en su lugar, se declara que **SE RECHAZA** dicha demanda, sin costas de la causa.

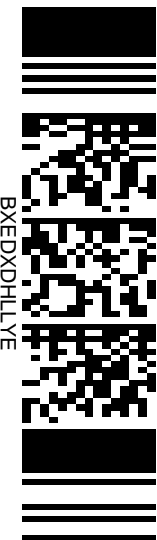
Se deja constancia que se hizo uso de la facultad conferida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

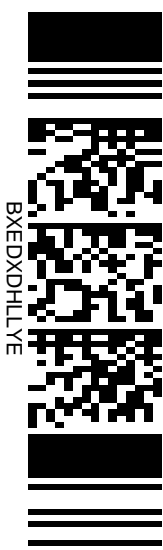


Regístrese y devuélvase.

Rol 894-2022 (Civil)

Redacción del Ministro Titular Sr. Óscar Clavería Guzmán, quien no firma por encontrarse haciendo uso de feriado legal.





BXEDXDHLLYE

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta integrada por Ministro Eric Dario Sepulveda C. y Abogado Integrante Marcelo Rodrigo Diaz S. Antofagasta, once de enero de dos mil veintitrés.

En Antofagasta, a once de enero de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

